



INFORME ESPECIAL

Los nuevos senderos del movimiento indígena: protesta ambientalista

Madrid, enero 2014

d+i LLORENTE & CUENCA

1. INTRODUCCIÓN: 30 AÑOS DE MOVIMIENTO INDÍGENA (1980-2013)
2. CAUSAS DEL RENACIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA INDÍGENA (1980-1992)
3. LAS PRIMERAS OLEADAS DE MOVILIZACIONES INDÍGENAS (1990-2003)
4. CRISIS Y CAMBIO DEL MOVIMIENTO INDÍGENA (2003-2013)
5. LA RUPTURA ENTRE LA IZQUIERDA Y EL INDIGENISMO AMBIENTALISTA (2009-2013)
6. MAPA DE LAS PROTESTAS INDÍGENAS ACTUALES
7. CONCLUSIONES

LLORENTE & CUENCA

1. INTRODUCCIÓN: 30 AÑOS DE MOVIMIENTO INDÍGENA (1980-2013)

La emergencia y visibilidad de lo indígena es uno de los fenómenos políticos y étnico-sociales más importantes en la historia reciente de América Latina. Se trata de un hecho que corrió paralelo a la democratización de los países latinoamericanos en los años ochenta. Si bien hundía sus raíces desde comienzos del siglo XX, fue en el último cuarto de la pasada centuria cuando los propios intelectuales y líderes indígenas tomaron las riendas del movimiento y se convirtieron en un nuevo actor político, logrando introducir sus demandas en las agendas políticas nacionales, mediante una intervención política directa.

Hace 30 años, coincidiendo con las transiciones a la democracia (en los años 80) y la definitiva consolidación de la misma (los años 90) aparecieron los movimientos indigenistas, con especial fuerza e intensidad en Ecuador y Bolivia, y con menor capacidad de expansión en otros países como México, Guatemala, Brasil, Perú y Chile.

Se experimentó en esa época un inusitado auge del activismo indígena (el llamado “despertar de la cuestión indígena”) con el ascenso de estos movimientos y su abanico de nuevas reivindicaciones relacionadas con temas como la territorialidad, la autonomía y la diversidad cultural. Además, sus propias reivindicaciones no hacían sino poner en cuestión el tradicional modelo de estados liberal-republicanos creados en el siglo XIX, debido a su rechazo a la homogeneidad cultural y la universalidad de los derechos ciudadanos.

Pero su historia desde los años 70 hasta la actualidad ha estado lejos de ser lineal. Ha atravesado, como se va a ver a continuación, por diferentes momentos y estrategias hasta llegar a la actual coyuntura.

“El proceso de democratización, iniciado en los 80, y que se consolidó a escala regional en los 90, abrió oportunidades para el protagonismo político de nuevos actores organizados desde la sociedad civil, entre ellos los sectores indígenas”

2. CAUSAS DEL RENACIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA INDÍGENA (1980-1992)

En el contexto de los años 80, los movimientos políticos indígenas se organizaron y crearon sus propias fuerzas políticas que buscaban la autonomía y el reconocimiento a su identidad, el incremento de su influencia e incluso la toma del poder vía electoral (caso de Ecuador desde 1996) o por las armas (rebelión zapatista en Chiapas en 1994).

En esas décadas el movimiento tuvo éxitos indudables como recuerda el académico Salvador Martí: “La irrupción del movimiento zapatista y el discurso del Sub-comandante Marcos desde la segunda hasta la sexta Declaración de la Selva Lacandona; el marcado acento multicultural del Acuerdo de Paz Firme y Duradera firmado en Guatemala en 1996; la articulación y el protagonismo de la confederación de organizaciones indígenas panandinas en Ecuador; la intensa movilización de las organizaciones aimaras y quechuas en Bolivia; la movilización de los mapuches en Chile; y el impacto mediático de algunos líderes de pueblos de la cuenca amazónica. Todos estos casos son una muestra de la trascendencia que ha ido cobrando este fenómeno en América Latina”.

Pero, ¿por qué se dio ese auge de los movimientos indígenas en los años ochenta y noventa?

Al menos, se pueden entresacar cuatro factores:

La apertura democrática

El proceso de democratización, iniciado en los 80, y que se consolidó a escala regional en los 90, abrió oportunidades para el protagonismo político de nuevos actores organizados desde la sociedad civil, entre ellos los sectores indígenas. En definitiva, la democratización facilitó que la sociedad civil tuviera mayor protagonismo frente a un Estado con un perfil menos autoritario y que veía sus competencias reducidas tras las reformas estructurales de los años 90.

En un informe coordinado por Heraldo Muñoz, Director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se señala que “en el escenario sociopolítico latinoamericano de fines de la década de 1970 y comienzos de la de 1980, los procesos de transición de las dictaduras hacia las democracias y la lucha por los derechos ciudadanos, reflejados en las demandas que surgieron de distintos sectores sociales, adquirieron un lugar central en la esfera pública. Surgen en esta coyuntura los llamados nuevos movimientos sociales latinoamericanos (Calderón y Jelin, 1987: 84): “acciones colectivas con alta participación de base que utilizan canales no institucionalizados y que, al mismo tiempo, van elaborando sus demandas, van encontrando formas de acción para expresarlas y se van constituyendo en sujetos colectivos, es decir, reconociéndose como grupo o categoría social”.

“El nacimiento de una élite intelectual indígena urbana sirvió para dar soporte ideológico y establecer redes de apoyo a las movilizaciones tanto en el interior de cada país como en el exterior”

Reacción a los cambios económicos y sociales provocados por las reformas “neoliberales” de los años 90.

Esas reformas de los 90 provocaron que el Estado se retirara de muchos ámbitos, hueco que fue ocupado por la sociedad civil. Resurgieron en ese contexto propicio grupos locales indígenas hasta ese momento mediatizados o cooptados por el Estado, los cuales establecieron relaciones directas con una gran variedad de actores internacionales (gobiernos, organizaciones no gubernamentales, iniciativas de entes municipales...).

En ese sentido, los planteamientos de los grupos indígenas encontraron acogida y respaldo material e intelectual, desde fines de la década de 1970, entre la Iglesia católica (fue muy importante el papel que tuvieron, por ejemplo, los curas salesianos en Ecuador) y las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Asimismo, el modelo económico cambió y se pasó de las políticas de Industrialización por Sustitución de Importaciones, propias de los años 40, 50 y 60, a nuevas políticas de corte “neodesarrollista”, extractivista y de explotación de los recursos naturales que afectaba los intereses de los sectores indígenas rurales, donde suelen encontrarse los recursos mineros, y que contribuyeron a acelerar su movilización.

Esos cambios, como argumenta el sociólogo Fernando Calderón, formaban parte de “una serie de

transformaciones en la estructura social de los distintos países, cuyos principales rasgos serían: a) complejización de las asimetrías en los patrones de inclusión y exclusión social, tanto en el plano simbólico como en el material; b) cambios en las instituciones básicas de la socialización y de las formas y estructuras comunicativas; c) incorporación de nuevos temas en la agenda política y socioeconómica, sobre la base de demandas culturales, en particular los derechos multiculturales, asociadas con las nuevas asimetrías de la exclusión social; y d) desarrollo de nuevas especificidades informacionales de los mecanismos de exclusión debido al impacto de la globalización”.

El nacimiento de una élite intelectual indígena urbana sirvió para dar soporte ideológico y establecer redes de apoyo a las movilizaciones tanto en el interior de cada país como en el exterior.

El favorable contexto internacional

El crecimiento del indigenismo se vio favorecido, a escala internacional, por diversos hechos ocurridos en la década del noventa que comenzó con la conmemoración del V Centenario, efeméride que provocó la polarización y exacerbación de los sentimientos a favor y en contra de tal fecha. Fue un motivo para la movilización y las protestas que además se vieron avaladas con la concesión del Premio Nobel de la Paz a una indígena (la guatemalteca Rigoberta Menchú) el mismo año 1992.

“Mientras que las demandas campesinas se enfocaron en la reforma agraria, hoy los indígenas rescatan esencialmente su derecho al reconocimiento y a la afirmación de su identidad”

En paralelo, en el año 1992, en el marco de la Cumbre de Presidentes de Iberoamérica, se firmó en Madrid el acuerdo para crear el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, a la vez que el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, destinó recursos humanos y financieros para apoyar proyectos en esta área. Igualmente la Organización de Estados Americanos decidió encomendar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la elaboración de un proyecto de Declaración Interamericana de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Uno de los cambios más importantes y de mayor trascendencia fue la convención 169/89 de la Organización Internacional del Trabajo en la que se reconocía que las prioridades en materia de desarrollo serían marcadas por los propios pueblos indígenas. En sus artículos 6, 7 y 15 se diseñaban mecanismos de participación, el derecho de consulta y el consentimiento previo para que los pueblos indígenas pudieran defender sus derechos estatuarios y qué modelo de explotación desean implementar en sus territorios. Se han creado, a partir de ahí, formulas para que los indígenas puedan incidir en las decisiones cuando sus territorios sean objetivo de empresas o de la administración estatales con el fin de extraer recursos.

Por último, no hay que olvidar el aumento de la producción académica centrada en temas indígenas en los 90 (aunque desde los 60-70 venía creciendo de forma considerable) con un ses-

go claramente favorable a las reclamaciones indígenas lo cual en algunos casos se tradujo en una idealización de los valores, cultura y modos de vida indígenas.

Todo ello favoreció que se produjera un gran cambio y transformación en cuanto a los objetivos y la propia coherencia ideológica interna del movimiento pues como señala José Bengoa “mientras en el pasado -especialmente las décadas de 1960 y 1970- los indígenas reivindicaban su identidad campesina y de clase, en el presente las organizaciones han puesto de relieve sus particularidades étnicas. Mientras que las demandas campesinas se enfocaron en la reforma agraria, hoy los indígenas rescatan esencialmente su derecho al reconocimiento y a la afirmación de su identidad. Mientras en la primera parte del siglo pasado los actores más activos políticamente y con mayor visibilidad en la escena nacional eran los campesinos que fueron sujetos”.

3. LAS PRIMERAS OLEADAS DE MOVILIZACIONES INDÍGENAS (1990-2003)

Tras el renacimiento del movimiento indígena ocurrido en los años 80 y el impulso experimentado a comienzos de la siguiente década, llegó el momento del despliegue y crecimiento en los 90. A lo largo de esos años se pudo ir comprobando que ese movimiento se caracterizaba por su heterogeneidad y por la diversidad en sus demandas y estrategias con especificidades propias y variedad de situaciones de país a país.

“La legitimidad del movimiento indígena creció sobre todo en momentos en que no existían actores sociales o populares predominantes en la escena pública y la crisis de legitimidad política se incrementaba”

De todas maneras, sí es posible encontrar ya en los 90 una serie de importantes paralelismos y continuidades a escala global en toda la región. Las aspiraciones de estos movimientos se dirigían en varias direcciones reclamando derechos económicos, sociales, culturales así como derechos civiles y políticos.

A lo largo y ancho de la región, con mayor o menor intensidad, se vivieron ejemplos de este tipo de “despertar indígena”, aunque fue en Ecuador donde arraigó con más fuerza.

Los indígenas ecuatorianos crearon en los 80 una fuerte organización sindical, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que aglutinaba a las organizaciones indígenas regionales más representativas como ECUARUNARI (Confederación de los pueblos de la nacionalidad Quichua) o la CONFENAIE (Confederación de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía). Luego en los 90 (1995) nació el brazo político, Pachakutik.

A inicios de los años 90, la CONAIE organizó el primer levantamiento indígena de la época contemporánea defendiendo propuestas de pluriculturalidad y de plurinacionalidad. Luego, tuvo lugar la marcha de los pueblos indígenas de Pastaza en 1992, y los actos de rechazo al V Centenario del Descubrimiento que otorgaron al proceso de constitución de la CONAIE, una dimensión nacional e incluso internacional.

Sobre esa base trató de dar el salto a la arena política a través de un partido político, Pachakutik: una organización que consiguió el 20% de los votos en las presidenciales de 1996 y el 14% en 1998. Participó activamente en el golpe de Estado de 2000 contra Jamil Mahuad y en coalición con el partido de Lucio Gutiérrez alcanzó el poder en 2003.

Como señala el sociólogo Jorge León Trujillo la legitimidad del movimiento indígena “creció sobre todo en momentos en que no existían actores sociales o populares predominantes en la escena pública y la crisis de legitimidad política se incrementaba. Es entonces cuando las organizaciones indígenas logran captar el espacio de la contestación dejado por las organizaciones sindicales, a través de la protesta como expresión del descontento social. Protesta a la que se sumaron reivindicaciones populares, gracias a las cuales los indígenas construyeron una imagen que encarnaba la ética y finalmente, visos puntuales de un interés general en contra de la tendencia desreguladora entonces predominante”.

Todas estas movilizaciones indígenas de finales de los 80 y los 90 tuvieron muy evidentes efectos políticos y legislativos pues fue acompañada de una oleada de reconocimientos constitucionales de los derechos indígenas, por parte de los Estados en la década de los noventa. Las protestas convirtieron, además, a los indígenas

“De las movilizaciones de los 80 y 90, el movimiento indígena extrajo como resultado el derecho de los pueblos indígenas a determinar su propio desarrollo”

en interlocutores públicos lo que les permitió modificar propuestas o políticas gubernamentales.

Es lo que Donna Van Cott, de la Universidad de Connecticut llama nuevo tipo de constitucionalismo “multicultural” en América Latina en el que se reconoce formalmente la naturaleza multicultural de las sociedades y la existencia de pueblos indígenas como colectivos subestatales distintos; se reconoce la ley consuetudinaria indígena como oficial y como derecho público así como los derechos de propiedad sobre las tierras comunales. También se reconoce el estatus oficial de las lenguas indígenas en el territorio y los espacios donde los pueblos están ubicados, se garantiza una educación bilingüe y el derecho a crear espacios territoriales autónomos.

Este “constitucionalismo multicultural” tuvo traducciones concretas en 1991, en Colombia, donde una nueva Constitución incorporó la cuestión indígena: “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. Luego, otros países siguieron el mismo camino. Por ejemplo, la reforma Constitucional de Argentina (1994) reconocía la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”. La de Bolivia ya en 1994, antes del ascenso de Evo Morales, ya definía al país como “una nación libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en República unitaria, (que) adopta para su gobierno la forma democrática

representativa, fundada en la unidad y la solidaridad de todos los bolivianos”.

La de Guatemala (1985) declaraba que este país estaba formado por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya y posteriormente a los acuerdos ha establecido el reconocimiento del pluriétnicismo y la multiculturalidad.

Incluso, en Bolivia en el gobierno Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) un líder indígena llegaba a la Vicepresidencia de la Nación, Víctor Hugo Cárdenas a la vez que se aprobaba una Ley de Participación Popular en 1994 que impulsaba un proceso de descentralización e incremento de la participación indígena.

De las movilizaciones de los 80 y 90, el movimiento indígena extrajo como resultado el derecho de los pueblos indígenas a determinar su propio desarrollo reconocido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y por la Declaración Universal de los Pueblos indígenas.

4. CRISIS Y CAMBIO DEL MOVIMIENTO INDÍGENA (2003-2013)

El movimiento indígena se fue desdibujando de diversas maneras en la región entre finales de los 90 y comienzos de la nueva centuria. En Ecuador, por las alianzas que no funcionaron con los partidos tradicionales y en México porque el zapatismo tocó techo en cuanto a sus posibilidades de seguir avanzando.

“Las guerras del Agua y del Gas bolivianas mostraron que un tema coyuntural pero de profundo calado podía servir de nexo de unión entre los indígenas y el resto de grupos sociales”

Además, como apuntan los académicos Nancy Postero y León Zamosc, los grupos indígenas se dieron cuenta de que “la simple existencia de una mayoría demográfica no garantiza un resultado electoral favorable” como el fracaso del referéndum de 1999 en Guatemala evidenciaba. Una consulta en este país centroamericano, en la que se esperaba aprobar una amplia reforma constitucional que ampliaba los derechos de los indígenas. Sin embargo, solo votó el 18% de la población y ganó el “No”.

Así pues, estos fracasos provocaron que con el comienzo del nuevo siglo el movimiento indígena llegara a la conclusión de que para conseguir mayor grado de influencia debía tender puentes con sectores políticos no indígenas y encontrar nexos de unión más amplios que las meras reclamaciones indigenistas para conseguir más eco y mayor movilización.

Desde el cambio de siglo el panorama de las movilizaciones reúne una serie de características peculiares:

- La vía armada no es un camino pero sí los conflictos y protestas de baja intensidad que ponen en cuestión el monopolio de la violencia de un Estado que no puede reprimir esas protestas de forma tan contundente como lo hacía ante las antiguas sublevaciones. Todo lo cual les proporciona a los movimientos indígenas poder de veto y de “chantaje al Estado”.
- Además esos grupos indígenas logran articular alianzas

amplias que van más allá del tema indígena enarbolando banderas que pueden ser acogidas por otros grupos sociales en “alianzas estratégicas que pueden abrir el camino para avanzar hacia soluciones realmente integrativas de la cuestión indígena ya que afectan a todos los sectores sociales”.

Esto se tradujo en que mientras la vía electoral ecuatoriana entraba en crisis terminal (ese declive del movimiento indígena en Ecuador se expresó en 2006 cuando solo obtuvo el 2% de los votos en las elecciones lo cual condujo a la pérdida de cohesión interna), otras fórmulas ganaban peso. Por ejemplo, en Bolivia donde las “Guerras del Agua” (2001) y después del “Gas” (2005) enseñaron que el camino para llegar a crecer, hacer escuchar su voz y conseguir éxitos políticos marcando la agenda era otro diferente al de la movilización exclusivamente indígena y centrada en las problemáticas de ese sector étnico.

Las guerras del Agua y del Gas bolivianas mostraron que un tema coyuntural pero de profundo calado podía servir de nexo de unión entre los indígenas y el resto de grupos sociales, ganando así capacidad de llegada a amplios sectores de la población lo que conjugado con un liderazgo carismático (del tipo del de Evo Morales en Bolivia) daba al movimiento mayor alcance.

Desde hace una década, por lo tanto, los movimientos indígenas cuentan con una agenda

**“Las nuevas
movilizaciones que
tienen lugar desde
hace una década sacan
lecciones del fracaso de
la vía armada de los 90”**

mucho más extensa que abarca y acoge intereses sociales y étnicos más amplios. Además, la presión y disputa creciente sobre recursos naturales ubicados en tierras indias (o reivindicadas por ellos) favorece la unificación de las diferentes étnicas y les sirve de base para elaborar una propuesta de desarrollo alternativa (ecologista y ambientalista) que gana apoyos entre sectores no indígenas, urbanos, y capta respaldo internacional lo cual legitima este mensaje de tipo ambientalista.

Las nuevas movilizaciones que tienen lugar desde hace una década sacan lecciones del fracaso de la vía armada de los 90 (el caso zapatista), y de las tendencias políticas electorales (casos de Ecuador con Pachakutik, o de katarismo en Bolivia).

Como señalara en 2010 el académico de la Universidad de Salamanca, Salvador Martí, “el hecho de que la mayoría de los recursos estratégicos del siglo XXI (agua, biodiversidad, gas, petróleo, minerales, bosques) estén ubicados en zonas en las que habitan pueblos indígenas hace prever que episodios como los de Bagua, en Perú, de Awás Tingni, en Nicaragua, o de Ralco en Chile, se multipliquen en el futuro. Así, a pesar del cierre de las «oportunidades» que se vislumbran en este nuevo ciclo, la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos va a continuar. El aprendizaje organizativo de las últimas décadas y la consagración de derechos específicos como conse-

cuencia de las reformas constitucionales y legislativas constituyen un factor decisivo”.

Es el caso, en sus primeros años de ascenso hacia el poder, del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia. El movimiento cocalero nacido en los 80 se definió como movimiento de productores de coca, articuló elementos indígenas para defender la coca como “hoja sagrada” y aglutinó diversos sectores sociales e indígenas.

Pero además fue capaz de construir una amplia coalición social en la que lo ambiental tenía una importancia medular. La académica Sofía Cordero Ponce señala que “el Mas no es una simple expresión de las comunidades indígenas, sino una fuerza que articula una pluralidad de sectores populares. Obtuvo el 20% en 2002 con un planteamiento indigenista y superó el 50% en 2006 y el 60% en 2009 gracias a una propuesta más amplia que abarcaba a los sectores populares, los indígenas y sectores de las clases medias”.

Esa alianza entre las tesis ambientalistas e indigenistas, de todas formas, no es nueva y tiene claros antecedentes en los años 90. José Bengoa en un informe de la CEPAL señalaba cómo desde esos años se consolidó “la alianza entre los movimientos indígenas y los medio ambientalistas en el continente. Esta alianza se expresa en numerosos conflictos que son asumidos tanto por los indígenas, como por los “verdes”. La dirigencia indígena por

“La propuesta indígena-ambientalista actual supone una reacción a las políticas extractivistas”

su parte ha incorporado los elementos del discurso ecologista a su propio discurso indigenista, y por su parte para muchos movimientos medio ambientalistas los indígenas aparecen como los “guardianes históricos del medio ambiente”, produciéndose muchas veces una cierta idealización de los mismos. Independientemente de la profundidad de esta alianza, no cabe duda que ha permitido al movimiento indígena acercarse a amplios sectores de población y opinión pública, que consideran el respeto y cuidado del medio ambiente como un bien superior e intransferible. En algunos países, como Ecuador por ejemplo, la alianza ha sido eficiente en términos de votos y obtención de representación parlamentaria”.

La propuesta indígena-ambientalista actual supone una reacción a las políticas extractivistas y sale al paso de los argumentos de los gobiernos y de las empresas transnacionales dedicadas a la explotación minera o a los emprendimientos hídricos. Así rechazan que exista una nueva tecnología que protege al medio ambiente, la llamada minería verde, moderna o responsable. No creen que la minería genere empleo y propicie el desarrollo económico sostenible para las comunidades. Tampoco creen que las transnacionales de la minería metálica sean respetuosas de los derechos humanos, pues las acusan de provocar el desarraigo de grupos humanos de su tierra, viciar el medioambiente de los pueblos provocando enfermedades de los pulmones y la piel.

5. LA RUPTURA ENTRE LA IZQUIERDA Y EL INDIGENISMO AMBIENTALISTA (2009-2013)

Sin embargo, esa primigenia alianza entre indígenas ambientalistas y nueva izquierda (la encarnada por Evo Morales en Bolivia y por Rafael Correa en Ecuador) no duró mucho. En realidad, lo hizo mientras esos nuevos regímenes estaban emergiendo y construyéndose (2005-2009) pero cuando esos liderazgos se asentaron, se empezaron a alejar de los grupos ambientalistas y a entrar en conflicto sus respectivas agendas.

El choque de paradigmas (desarrollismo vs “filosofía indígena del buen vivir” basada en la armonía con la naturaleza) se debía, como apunta Sofía Cordero, a que el desarrollismo de gobiernos como los de Correa o Morales “busca el retorno del Estado activo” que choca con “los nuevos sujetos reconocidos en la ciudadanía que reclaman sus derechos como «iguales». Sin duda, una ciudadanía con nuevos sujetos colectivos obliga al Estado y sus instituciones a ceder espacios de poder, lo que no suele ser del agrado de los actuales gobiernos boliviano y ecuatoriano, de matriz fuertemente centralizadora y con presidencialismos fuertes. A menudo se considera que los intereses estatales son universales frente al particularismo de los intereses comunitarios y se sospecha que los autogobiernos podrían ser colonizados por las empresas transnacionales”.

Ese desarrollismo de los gobiernos de Correa y Evo Morales ha acabado entrando en colisión con

“La izquierda, tanto reformista como la del “Siglo XXI”, sufre una profunda contradicción entre los partidarios del desarrollismo y los ambientalistas”

las tesis del ambientalismo indígena. Dos conflictos son reveladores al respecto. En Ecuador, en 2012, la CONAIE inició la «Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos», en rechazo a la firma de contratos con empresas chinas para la explotación minera a gran escala.

Y en Bolivia, se inició un largo conflicto en torno de la construcción de una carretera que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis), a la cual se opone gran parte de los pueblos indígenas allí asentados, que reclaman su derecho a consulta previa.

Así pues, la izquierda, tanto reformista como la del “Siglo XXI”, sufre una profunda contradicción entre los partidarios del desarrollismo y los ambientalistas. Hace una década ambas izquierdas iban unidas en torno al liderazgo de Morales, Correa o Humala. Hoy aparecen enfrentados en proyectos de país y económicos diferentes.

Por ejemplo, Evo Morales inició su carrera política claramente vinculado a los sectores ambientalistas lo mismo que Rafael Correa y Ollanta Humala quienes en principio se oponían a los proyectos extractivistas mineros. Sin embargo, en la actual coyuntura, el líder cocalero denuncia que detrás del movimiento ambientalista existe un “nuevo tipo de colonialismo” y Rafael Correa señala a los ecologistas de “infantiles”.

Ahora todos ellos están en la vereda de enfrente de los ambientalistas pues respaldan la

profundización del modelo de exportación de productos primarios propuesta que choca de plano con la tesis ambientalistas.

Así pues, la mayoría de los conflictos sociales actuales en América Latina, según un informe del Banco Mundial, giran sobre las dimensiones ambientales y sociales de la minería. También la Defensoría del Pueblo peruano, en un reciente informe, identifica como una de las causas de los conflictos socioambientales al “temor justificado de la población a la potencial contaminación que pueden ocasionar las actividades extractivas”. A esto no escapan las propias empresas mineras que han incorporado como un elemento infaltable de la Responsabilidad Social Corporativa el tema medioambiental.

Por lo tanto, las disputas por recursos naturales es el aspecto más recurrente en los conflictos mineros. Sin embargo, el Banco Mundial señala que no siempre se trata de conflictos ecológicos en el sentido estricto de la palabra, es decir, restringidos a la defensa de la biodiversidad debido a su valor propio. Aunque este es el aspecto que más interesa a las organizaciones ecologistas, las comunidades rurales consideran el tema ambiental también —y probablemente más— en términos de derechos al acceso a la tierra y al agua, es decir, los medios que constituyen el fundamento de su economía familiar.

Así pues, “el movimiento indígena se ha apropiado del discurso ambientalista que en los años 50

“La defensa de la tierra ha dejado de ser una lucha de corte agrarista para pasar a ser una lucha en sentido ecologista”

o 60 prácticamente no existía ya que el discurso de los antiguos indios estaba concentrado en el lenguaje de la explotación», recuerda Bengoa. En la década de 1970 comenzó a desarrollarse un fuerte discurso medioambientalista en los países desarrollados, y «las externalidades no controladas del desarrollo capitalista comenzaron a preocupar a crecientes sectores de la sociedad en los países desarrollados». A partir de distintos foros internacionales, las demandas indígenas se acercaron a las propuestas ambientalistas y en 1992, en la Cumbre de la Tierra, se consolidó el encuentro entre estos dos discursos: «Los indígenas entrado el siglo XXI se han transformado en acto-

res principales en la defensa del medio ambiente. La defensa de la tierra ha dejado de ser una lucha de corte agrarista para pasar a ser una lucha en sentido ecologista». Como apunta Bengoa, la articulación con el discurso ecologista les ha permitido a los movimientos indígenas establecer una sagaz alianza con los sectores posmodernos de la demanda social.

Y eso porque llevan a cabo una «relectura urbana de la tradición indígena realizada por los propios indígenas en función de los intereses y objetivos indígenas. No cabe duda de que muchos elementos de la visión indígena del pasado existían previamente, pero tampoco puede caberle duda al observador desapasionado de que muchos de esos elementos constituyen una idealización del pasado».

TABLA DE CONFLICTOS AMBIENTALISTAS EN AMÉRICA LATINA

Perú	33
Chile	33
Argentina	26
México	26
Brasil	20
Colombia	12
Bolivia	8
Ecuador	7
Panamá	6
Guatemala	6
Nicaragua	4
República Dominicana	4
El Salvador	3
Honduras	3
Costa Rica	2
Paraguay	1
Uruguay	1

Datos: Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina

6. MAPA DE LAS PROTESTAS INDÍGENAS ACTUALES

Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina existen en la actualidad en la región más de 180 conflictos socio-ambientales que involucran a 183 proyectos mineros y a 246 comunidades.

Los países que padecen mayor número de conflictos son Perú y Chile con 33, Argentina y México con 26, Brasil 20 y Colombia con 12. El resto de países no pasa de la decena de conflictos.

A continuación pasaremos a analizar algunos de estos conflictos y su incidencia política.

“En la región de la Amazonía peruana las comunidades indígenas siguen luchando por sus tierras y su forma de vida”

Perú, los bandazos de Humala

Ollanta Humala levantó en la campaña de 2011 todo un discurso contrario a la minería del oro y al derruche y contaminación del agua.

El discurso antiminerero, que una respuesta a las movilizaciones indígenas producidas durante la gestión de Alan García y que desembocaron en protestas en Cajamarca y Cusco y en los sucesos de Bagua (Amazonas) donde murieron 33 personas, era muy claro y contundente por parte de Humala: “He visto un conjunto de lagunas y me dicen que las quieren vender. ¿Ustedes quieren vender su agua? ¿Qué es más importante, el agua o el oro? Porque ustedes no toman oro, no comen oro, pero nosotros tomamos agua, nuestras criaturas toman agua, nuestro ganado toma agua. Y de ahí sale la leche, salen los quesos, sale la riqueza. ¡El agua para los peruanos!”.

Luego, ya en el gobierno, dio un giro significativo cuando intentó acoger en su seno a la vez las tesis ambientalistas y las neodesarrollistas. El desafío más serio para el gobierno de Humala se sitúa en Conga (Cajamarca), en el norte de Perú, donde existe una fuerte oposición a un proyecto minero de la compañía estadounidense Newmont. Los residentes en esta región agrícola temen que la mina de oro a cielo abierto, cuya construcción requeriría el reemplazo de cuatro lagunas andinas con reservas artificiales, podría contaminar los recursos hídricos y afectar a la salud de las personas.

Un proyecto que ahora el propio Humala ha pasado a defender: “El proyecto Conga (en el departamento de Cajamarca) es un proyecto importante para el Perú, porque le va a permitir realizar la gran transformación. (...) Rechazamos posiciones extremas: el agua o el oro. Nosotros planteamos una posición sensata: el agua y el oro”.

Pero ese cambio y esa propuesta le han conducido a tener que hacer frente a fuertes protestas antimineras en el interior del país encabezadas por amplios sectores indígenas y populares. Humala recibió, según informes de la prensa local, más de 200 conflictos sociales, y durante el gobierno de su predecesor, Alan García, según el Defensor del Pueblo en Perú, 195 personas murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad entre enero de 2006 y septiembre de 2011.

Además, en la región de la Amazonía peruana las comunidades indígenas siguen luchando por sus tierras y su forma de vida. Gran parte de la selva tropical del Perú está concesionada a empresas mineras y petroleras: solamente las concesiones mineras abarcan casi el 14% de la superficie de las tierras y más del 75% de la Amazonía peruana está concesionada a la industria petrolera.

Humala ha apostado por continuar con un crecimiento económico basado en un modelo minero-exportador: del total de las exportaciones, el 60% proviene del sector minero de la econo-

“Las organizaciones indígenas —especialmente de tierras bajas— propugnan el acceso al territorio y la gestión de los recursos naturales bajo formas comunitarias”

mía y Perú ocupa el sexto lugar entre los países exportadores de oro del mundo.

La pugna desarrollistas vs ambientalistas en Bolivia

Evo Morales llegó a la presidencia en 2006 con un discurso indigenista y centrado en el respeto a la Madre Tierra, la Pachamama. “La Tierra no nos pertenece, sino que pertenecemos a la Tierra”, expuso Morales ante la Asamblea General de la ONU en 2009.

Ahora ese discurso ya no es tan indigenista sino nacionalista y neodesarrollista en vez de ambientalista. Ese cambio explica, por ejemplo, el conflicto del TIPNIS desde 2011 por la construcción de una carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécuire (TIPNIS) que impulsa el gobierno de Morales.

Con motivo de la resistencia indígena a este proyecto, Evo Morales no dudó en romper con los sectores indigeno-ambientalistas ya que “los enemigos históricos del movimiento indígena se presentan como defensores del medio ambiente cuando sus políticas nunca estuvieron dirigidas a su preservación. La derecha se adhiere a los conflictos que se presentan en algunas regiones o sectores, para desgastar al Gobierno. Cuando se presenta un problema de límites toda la derecha está ahí, para magnificar se meten ahí, profundizar y enfrentar a los propios compañeros”.

El académico Pablo Rosell asegura en un artículo en la revista

Nueva Sociedad que “el contenido programático central en el conflicto del Tipnis está referido a la orientación del modelo de desarrollo. La propuesta de la carretera se constituye en un hito material y simbólico de la preeminencia de un modelo de desarrollo convencional (integración física del país) y conlleva los riesgos de la expansión de la frontera agrícola en detrimento de la preservación de zonas boscosas vírgenes”.

Y añade que “para las organizaciones que se auto reconocen como esencialmente indígenas, el territorio es lo central, puesto que se constituye en la base de una vida económica fundada en usos y costumbres ancestrales. Las organizaciones indígenas —especialmente de tierras bajas— propugnan el acceso al territorio y la gestión de los recursos naturales bajo formas comunitarias. Para las organizaciones que se auto reconocen como esencialmente campesinas, en cambio, la demanda central es el acceso a la tierra cultivable”.

No solo ha habido un alejamiento del movimiento indígena con respecto al gobierno de Evo Morales sino que la gestión oficialista, con sus políticas clientelares, de cooptación y de transferencias condicionadas, ha acabado dividiendo al movimiento indígena. La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) está fracturada en dos grupos. Uno afín al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) y el segundo, crítico con el Gobierno, liderado por Adolfo Chávez, un dirigente del pueblo Tacana que promovió

“Correa y el movimiento indígena han pasado entre 2006 y 2013 de la colaboración (la Conaie apoyó en 2006 en la segunda vuelta a Correa y se alineó con las políticas del gobierno) a un rechazo y condena de las tesis del otro”

las dos marchas contra la construcción de una carretera a través del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécuré (TIPNIS).

La ruptura de Correa con indígenas y ambientalistas

Algo similar le ocurrió al presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien a medida que se ha ido consolidando en la presidencia, ha perdido el respaldo de indígenas y ambientalistas como su excanciller Fander Falconí. Correa y el movimiento indígena han pasado entre 2006 y 2013 de la colaboración (la Conaie apoyó en 2006 en la segunda vuelta a Correa y se alineó con las políticas del gobierno) a un rechazo y condena de las tesis del otro.

Ante la emergencia de Correa, el movimiento se dividió y fracturó entre otras cosas por las políticas clientelares y de cooptación del ejecutivo ya que el presidente buscó ganarse a la población indígena pasando por encima de las organizaciones. El centralismo en la toma de decisiones y el desarrollismo Correista entró en conflicto con las posturas del movimiento indígena que proponía, entre otras cosas la consulta previa y, sobre todo el consentimiento previo, antes de ponerse en marcha cualquier proyecto extractivista.

Así, por ejemplo, de defender en 2007 la idea de preservar el Yasuní-ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) de la explotación petrolera, Correa ha pasado en 2013 a proponer una postura diametralmente opuesta: “Tenemos decenas de miles de millones de

dólares que el pueblo ecuatoriano necesita con urgencia. No podemos ser tontos útiles de nadie, tomaremos... la decisión de continuar o de explotar responsablemente el ITT”.

Para Rafael Correa ese “ecologismo infantil” impide el desarrollo del país y está manejado “desde las sombras (por) los que nunca han ganado media elección querían prohibir, impedir que este país aproveche sus recursos naturales no renovables. Jamás me voy a prestar a esos juegos, la historia dirá quién tuvo la razón cuando se calmen los ánimos, con serenidad se verá quién actuó en función de patria y quién actuó en función de fundamentalismos, dogmatismos e infantilismos”.

Correa defiende un modelo de desarrollo y de gestión “a la coreana” que prime el desarrollo económico y la presencia y dirección centralizada del Estado en ese proceso, mediante la empresas públicas como Petroamazonas. Tesis que colisiona directamente con el movimiento indigenista que se inclina por una gestión descentralizada en la que la decisión sobre la explotación o no de los recursos naturales sea una competencia de los poderes locales emanados del movimiento indígena.

De Lula a Daniel Ortega

Además, otros presidentes de izquierda en la región se han visto con problemas similares. Solo basta recordar la ruptura entre Lula da Silva y Marina Silva, su Ministra de Medio Ambiente, en 2008.

“En Brasil el mayor problema se sitúa en la Amazonía por el conflicto entre los grupos indígenas de esa zona cuyos intereses chocan con las iniciativas de las empresas mineras y los latifundistas”

La organización ecologista Greenpeace denunció entonces que la dimisión de Marina Silva evidenciaba que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva “ha decidido abandonar la Amazonía”: “La renuncia demuestra que este Gobierno no es serio, no tiene respeto por el medio ambiente ni por la Amazonía”.

En Brasil el mayor problema se sitúa en la Amazonía por el conflicto entre los grupos indígenas de esa zona cuyos intereses chocan con las iniciativas de las empresas mineras y los latifundistas.

El pasado octubre, por ejemplo, centenares de indígenas de distintas tribus y regiones realizaron una marcha en la capital brasileña para pedir más apoyo del gobierno federal con respecto a sus derechos. Los indígenas protestan por una iniciativa legal que propone que la competencia sobre todo lo relacionado a la creación y demarcación de nuevas tierras indígenas, que corresponde en la actualidad al Poder Ejecutivo, pase a la órbita del Parlamento. Los indígenas se oponen y afirman que esa modificación les daría más poder a latifundistas y empresas mineras y madereras que operan sobre todo en la Amazonía, donde se sitúa la mayor parte de las reservas indígenas del país.

Y en Chile durante la gestión de los socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet (2000-2010) germinó el proyecto de la hidroeléctrica de HidroAysén, pese a las protestas de los grupos

ecologistas. Las movilizaciones de los grupos indígenas mapuches, que continuaron durante la gestión de Sebastián Piñera, han encontrado un importante eco en los grupos de izquierda e incluso en la campaña para las presidenciales de 2013 la candidata de Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, ha recogido la idea de paralizar HidroAysén.

HidroAysén es una sociedad constituida por Colbún y Endesa —Chile— esta última controlada por Endesa —España— que planea construir cinco grandes centrales hidroeléctricas en las cuencas de los ríos Baker y Pascua, en la Patagonia chilena. La electricidad producida se transportaría a más de 2.300 kilómetros, hacia Santiago de Chile y las minas del norte, mediante el tendido de alta tensión más largo del mundo. El complejo hidroeléctrico aportaría 2.750 MW al Sistema Interconectado Central (SIC), con una capacidad de generación media anual de 18.430 GWh.

Las comunidades locales han mostrado su rechazo y han propuesto que se legisle para otorgar a la Patagonia el estatus de Reserva de la Vida; pero, por el momento, la legislación chilena reconoce que la propiedad de las fuentes de agua es privada y en la región de Aysén Enel Endesa posee más del 90% de los derechos del agua.

Otro proyecto que pone frente a frente a los desarrollistas de izquierda y a los ambientalistas es el del Canal Seco de Nicara-

“Los actuales movimientos de protestas indígenas llevan a cabo actos pacíficos de protesta social como denuncias, marchas, mítines, plantones, huelgas de hambre, invasiones de tierras y tomas de palacios municipales y oficinas gubernamentales”

gua que impulsa Daniel Ortega con el apoyo de una empresa de origen chino que busca construir un nuevo Canal interoceánico, como el que existe en Panamá.

Sectores indígenas nicaragüenses apoyan a la Mesa Nicaragüense ante el Cambio Climático, que aglutina a más de 20 organizaciones ambientales del país, expresó su rechazo al proyecto de construcción de un canal interoceánico “tal como está planteado”: “Compartimos el deseo de encontrar alternativas que nos conduzcan rápidamente a superar los niveles de pobreza, sin embargo, dichas rutas no deben comprometer las posibilidades de las futuras generaciones a vivir en un ambiente sano”.

Otros puntos de conflicto regional

- **México:** La políticas indigenistas en México se remontan a la primera mitad del siglo XX, originadas durante la Revolución, pero sufrieron una profunda transformación cuando se produjo la sublevación zapatista de Chiapas en 1994.

En la actualidad, más allá del agotado fenómeno zapatista, los actuales movimientos de protestas indígenas llevan a cabo actos pacíficos de protesta social como denuncias, marchas, mítines, plantones, huelgas de hambre, invasiones de tierras y tomas de palacios municipales y oficinas gubernamentales.

Guillermo Trejo, de la Universidad de Notre Dame, destaca las transformaciones experimentadas en los últimos 25 años en las demandas y las identidades de los indígenas capaces de construir un liderazgo indígena estratégico, capaz de transformar la identidad de sus movimientos conforme varían las circunstancias y las oportunidades económicas y políticas.

En la actualidad, más allá del agotado fenómeno zapatista, los actuales movimientos de protestas indígenas llevan a cabo actos pacíficos de protesta social como denuncias, marchas, mítines, plantones, huelgas de hambre, invasiones de tierras y tomas de palacios municipales y oficinas gubernamentales.

Así se pasó de demandas de naturaleza política (1976-1993) centradas en el cese a “la represión de caciques, terratenientes y de autoridades públicas (policías estatales y municipales); libertad a presos políticos; y la destitución de autoridades municipales, a nuevas demandas en los 90 centradas en el despertar de la conciencia indígena como demanda e identidad pública, entre los movimientos de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla”.

Como explica Trejo si bien el zapatista EZLN comenzó

**“Actualmente,
Panamá tiene cinco
comarcas indígenas que
representan el 20% del
territorio nacional”**

como una guerrillas marxistas-leninistas, a finales de 1994 a la altura de 1995-96 abrazaron el discurso etnicista y autonómico. Las demandas étnicas en general y la autonomía indígena en particular se convierten en una de las principales banderas de un movimiento indígena nacional en ciernes: “el objetivo del movimiento indígena organizado ya no es la tierra sino el territorio; ya no exigen recursos para los indígenas sino disputan las reglas para decidir y repartir los recursos que les tocarían como indígenas; ya no exigen la destitución de las autoridades públicas sino que ahora demandan la capacidad de elegir a sus autoridades públicas bajo sus propias reglas”.

- **La voz del pueblo indígena en Panamá:** En los últimos años, y en especial en los últimos cuatro años, los propios indígenas han salido del anonimato denunciando las “injusticias contra su pueblo y sus recursos”. Muchos de ellos han logrado —con ingentes esfuerzos— acceder a la educación universitaria, convertirse en profesionales exitosos y ocupar puestos importantes. A pesar de que no faltan obstáculos en su camino, los pueblos indígenas de Panamá se han apoyado en sus organizaciones para manifestarse ante el resto del país. Gracias a esa movilización, hoy su presen-

cia se ha hecho más sentida y palpable.

Actualmente, Panamá tiene cinco comarcas indígenas que representan el 20% del territorio nacional (417.559 habitantes): la comarca Ngäbe - Buglé, la Comarca Kuna Yala, la Comarca Emberá-Wounan, la Comarca Kuna de Madugandi y la Kuna de Wargandi. Son estos pueblos los que han aumentado el interés por los temas que les competen, a tal punto que solo hace falta ver algunos ejemplos de los últimos años: movilizaciones en contra de las reformas al Código Minero en 2011; la huelga duramente reprimida en Changuinola el año 2010; manifestaciones en el territorio Ngäbe contra las hidroeléctricas promovida en enero de 2008, que dejó pérdidas humana y heridos; entre otras.

Precisamente esta protesta sentó un precedente en la lucha indígena en Panamá, al suspenderse una reforma legislativa y obligar al presidente Ricardo Martinelli a sancionar una ley que prohíbe la explotación minera, y crea un régimen especial para la protección de los recursos hídricos y ambientales en la comarca indígena Ngäbe Buglé. Los pueblos originarios han cobrado beligerancia y sus luchas ganan más adeptos en varios sectores del país. Un tema que seguirá latente en

“La lucha contra las mineras a escala local ha propiciado una rearticulación del movimiento indígena”

el nuevo gobierno panameño que tendrá que buscar vías de diálogos con estos grupos que cuentan con régimen administrativo autónomo en sus tierras, donde se encuentra gran parte de los recursos hídricos y minerales a explotar.

- **Guatemala:** La tradicional división entre las diferentes étnicas indígenas en Guatemala (kakchikeles vs quichés, entre otros) y de los grupos mestizos (ladinos) con el grupo indígena se atenúa (aunque no desaparece) cuando en el centro del debate se encuentra el rechazo a las empresas mineras. Es lo que está ocurriendo en el área del Altiplano guatemalteco —fundamentalmente indígena— (departamentos de San Marcos, Huehuetenango etc.) donde se ha creado un Consejo de Pueblos de Occidente para oponerse a las políticas extractivistas del gobierno.

Un mensaje ambientalista y antiextractivista que sostienen organizaciones como la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina —CONIC— miembro de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya WAQIB KEJ, UASP, de CLOC y que tiene gran calado en el conjunto de la población y que cuenta con el apoyo de la Iglesia Católica. Por ejemplo del Obispo Álvaro Leonel Ramazzini para

quien “las empresas mineras, principalmente canadienses que explotan oro, plata y otros metales en Guatemala y en México “no sólo dejan migajas sino que son generadoras de conflictos sociales, además de que destruyen el medio ambiente”.

La lucha contra las mineras a escala local ha propiciado una rearticulación del movimiento indígena como se reconoce en diversos trabajos académicos, como el de Joris van de Sand sobre “Conflictos mineros y pueblos indígenas en Guatemala”: “Las respuestas organizativas de la comunidad a la minería muestran signos interesantes de una revitalización de la identidad indígena. Algunos observadores, por ejemplo, interpretan las consultas comunitarias como una recuperación de la comunidad indígena como sujeto colectivo. Otros, por otra parte, han anotado que la lucha contra la minería hasta ahora apenas ha sido articulada discursivamente en torno a demandas para el reconocimiento de los derechos colectivos indígenas, y que las comunidades no han logrado aún traducir sus exigencias en un programa político claro y comprensivo para la reforma del Estado. Indican que las comunidades deben relacionar su lucha con aspectos de su identidad, como fuente de capital socio-político”.

“Los Estados nacionales no ha sido aún capaces de articular cauces institucionales para atender las reclamaciones indígenas ambientalistas y hacerlas compatibles con las necesidades de desarrollo de los países”

7. CONCLUSIONES

El tema indígena está presente en la realidad latinoamericana con un fuerte componente político desde hace más de 30 años. Ha tenido diversas fisonomías y características pero lo que parece sobresalir es que posee una formidable capacidad de adaptación que le permite perdurar en el tiempo. Tuvo un mensaje indigenista hasta los años 50, marxista (indígenas vistos como clase social) hasta los 80-90 y actualmente ambientalista y antiglobalización.

Además, es uno de los pocos fenómenos que se da a escala regional desde México, pasando por Centroamérica y la mayoría de países de Sudamérica (Colombia, Perú, Brasil, Chile y Argentina). El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina calcula que en la región hay 175 conflictos socio-ambientales que involucran a 183 proyectos mineros y a 246 comunidades.

Posee asimismo una importante capacidad para marcar o alterar la agenda política de los países. El indigenismo ambientalista, si bien de carácter eminentemente local, tiene potencialidad para crear redes de apoyos y solidaridad a escala nacional e incluso internacional que potencia su presencia y posibilidades de influencia.

Asimismo, los conflictos que desencadenan las protestas indígenas medioambientales tienen un carácter muy disruptivo pues generan sensación de ingobernabi-

lidad o de pérdida del monopolio de la violencia legítima por parte del Estado, aunque, en realidad, en escasas ocasiones, poseen fortaleza para acabar con la propia institucionalidad.

América Latina ha entrado en un ciclo de mayor estabilidad, pero existen temas clave como las cuestiones medioambientales, ligadas con la tierra y los recursos naturales que pueden alterar esos equilibrios. Algunos analistas creen que estos conflictos tenderán a escalar por falta de vías institucionales capaces de ofrecer soluciones y plataformas de negociación.

En los próximos años la presión extractivista tanto de las empresas como de los estados debido a los altos precios de los commodities (puesto que, aunque a corto plazo bajen, van a seguir por encima de los precios históricos) permite augurar nuevos conflictos de carácter local pero con fuerte incidencia nacional en los países que los sufran. Los Estados nacionales no ha sido aún capaces de articular cauces institucionales para atender las reclamaciones indígenas ambientalistas y hacerlas compatibles con las necesidades de desarrollo de los países.

Como señala Salvador Martí “buena parte de los recursos estratégicos más preciados del siglo XXI (como son el agua, la biodiversidad, metales preciosos, gas y petróleo...) están presentes en espacios habitados por los indígenas... la lucha de

“Los actuales patrones de producción y consumo son insostenibles pues generan grandes costos económicos y sociales y ambientales que erosionan sus propias bases de sostenibilidad material en el mediano y largo plazo”

los pueblos indígenas por sus derechos va a continuar, aunque a través de otra coalición de actores, con mayor presencia de actores locales y menor apoyo de las redes internacionales... las movilizaciones indígenas van a continuar... y estas movilizaciones ya no podrán ser capturadas por Gobiernos... serán más silenciosas y con mayor énfasis en la protección de los recursos naturales y por tanto más focalizadas en el ámbito del territorio y de la vida local”.

Su capacidad para alterar la política nacional puede verse incrementado en caso de crisis coyunturales en las que el malestar de las clases

medias se aúne con las movilizaciones indígenas en un común rechazo a la institucionalidad y a la presencia de intereses foráneos.

Como señala Alicia Bárcena, Secretaria General de la CEPAL, “los actuales patrones de producción y consumo son insostenibles pues generan grandes costos económicos y sociales y ambientales que erosionan sus propias bases de sostenibilidad material en el mediano y largo plazo. El tema ambiental forma parte de la agenda pública... por las crecientes demandas ciudadanas” que encuentran así un nexo de unión con las reclamaciones indígenas.

LLORENTE & CUENCA

CONSULTORES DE COMUNICACIÓN

Consultoría de Comunicación líder en España, Portugal y América Latina

LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de comunicación en España, Portugal y América Latina. Cuenta con **16 socios** y más de **300 profesionales** que prestan servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y portuguesa.

Actualmente, tiene oficinas propias en **Argentina, Brasil, Colombia, China, Ecuador, España, México, Panamá, Perú, Portugal** y **República Dominicana**. Además, ofrece sus servicios a través de compañías afiliadas en **Estados Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay** y **Venezuela**.

Su desarrollo internacional ha llevado a LLORENTE & CUENCA a convertirse en 2011 y 2010 en **una de las cincuenta compañías de comunicación más importantes del mundo**, según el Ranking anual elaborado por *The Holmes Report*. En 2013, ocupa el puesto 51 del Ranking, ascendiendo una posición respecto a 2012.

Organización

DIRECCIÓN CORPORATIVA

José Antonio Llorente
Socio Fundador y Presidente
jallorente@llorenteycuenca.com

Enrique González
Socio y CFO
egonzalez@llorenteycuenca.com

Jorge Cachinero
Director Corporativo de Reputación e Innovación
jcachinero@llorenteycuenca.com

IBERIA

Arturo Pinedo
Socio y Director General
apinedo@llorenteycuenca.com

Adolfo Corujo
Socio y Director General
acorujo@llorenteycuenca.com

Madrid

Joan Navarro
Socio y Vicepresidente Asuntos Públicos
jnavarro@llorenteycuenca.com

Amalio Moratalla
Socio y Director Senior
amoratalla@llorenteycuenca.com

Juan Castellero
Director Financiero
jcastillero@llorenteycuenca.com

Lagasca, 88 – planta 3
28001 Madrid
Tel: +34 91 563 77 22

Barcelona

María Cura
Socio y Directora General
mcura@llorenteycuenca.com

Muntaner, 240-242, 1º-1ª
08021 Barcelona
Tel: +34 93 217 22 17

Lisboa

Madalena Martins
Socia Fundadora
madalena.martins@imago.pt

Carlos Matos
Socio Fundador
carlos.matos@imago.pt

Rua do Fetal, 18
2714-504 S. Pedro de Sintra
Tel: + 351 21 923 97 00

AMÉRICA LATINA

Alejandro Romero
Socio y CEO América Latina
aromero@llorenteycuenca.com

José Luis Di Girolamo
Socio y CFO América Latina
jldgirolamo@llorenteycuenca.com

Antonio Lois
Director Regional de RR.HH.
alois@llorenteycuenca.com

Bogotá

María Esteve
Directora General
mesteve@llorenteycuenca.com

Germán Jaramillo
Presidente Consejero
gjaramillo@llorenteycuenca.com

Carrera 14, # 94-44. Torre B – of. 501
Bogotá (Colombia)
Tel: +57 1 7438000

Buenos Aires

Pablo Abiad
Socio y Director General
pabiad@llorenteycuenca.com

Enrique Morad
Presidente Consejero para el Cono Sur
emorad@llorenteycuenca.com

Av. Corrientes 222, piso 8. C1043AAP
Ciudad de Buenos Aires (Argentina)
Tel: +54 11 5556 0700

Lima

Luisa García
Socia y CEO Región Andina
lgarcia@llorenteycuenca.com

Cayetana Aljovín
Gerente General
caljovin@llorenteycuenca.com

Av. Andrés Reyes 420, piso 7
San Isidro. Lima (Perú)
Tel: +51 1 2229491

México

Alejandro Romero
Socio y CEO América Latina
aromero@llorenteycuenca.com

Juan Rivera
Socio y Director General
jriviera@llorenteycuenca.com

Bosque de Radiatas # 22 – PH7
05120 Bosques las Lomas (México D.F.)
Tel: +52 55 52571084

Panamá

Javier Rosado
Socio y Director General
jrosado@llorenteycuenca.com

Avda. Samuel Lewis. Edificio Omega, piso 6
Tel: +507 206 5200

Quito

Catherine Buelvas
Directora General
cbuelvas@llorenteycuenca.com

Av. 12 de Octubre 1830 y Cordero.
Edificio World Trade Center, Torre B, piso 11
Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador)
Tel: +593 2 2565820

Río de Janeiro

Juan Carlos Gozzer
Director Ejecutivo
jcgozzer@llorenteycuenca.com

Rua da Assembleia, 10 – sala 1801
Rio de Janeiro – RJ (Brasil)
Tel: +55 21 3797 6400

São Paulo

José Antonio Llorente
Socio Fundador y Presidente

Alameda Santos, 200 – Sala 210
Cerqueira Cesar. SP 01418-000
São Paulo (Brasil)
Tel.: +55 11 3587 1230

Santo Domingo

Alejandra Pellerano
Directora General
apellerano@llorenteycuenca.com

Avda. Abraham Lincoln
Torre Ejecutiva Sonora, planta 7
Tel: +1 8096161975

ASIA

Beijing

Sergi Torrents
Director General
storrents@grupo-11.com

2009 Tower A. Ocean Express
N2 Dong san Huan Bei Road, Chaoyang District
Beijing - China
Tel: +86 10 5286 0338



d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias de LLORENTE & CUENCA.

Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.

d+i es una combinación global de relación e intercambio de conocimiento que identifica, enfoca y transmite los nuevos paradigmas de la comunicación desde un posicionamiento independiente.

d+i es una corriente constante de ideas que adelanta nuevos tiempos de información y gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra existe d+i LLORENTE & CUENCA.

www.dmasillorenteycuenca.com

d+i LLORENTE & CUENCA